



"Al servicio de la Justicia y de la Paz Social"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Magistrado sustanciador:
NATTAN NISIMBLAT MURILLO

Medellín, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Proceso:	Acción Popular
Radicado:	05001310300920180020301
Parte demandante:	Bernardo Abel Hoyos Martínez
Parte demandada:	Dulzuras Colombianas S.A.S.
Tema:	Nulidad trámite de acción popular.
Decisión:	Declara nulidad.

Sería del caso que el Tribunal decidiera la apelación formulada frente a la sentencia proferida el 20 de junio de 2023 por el Juzgado 9 Civil del Circuito de Medellín,¹ en la acción popular instaurada por Bernardo Abel Hoyos Martínez contra Dulzuras Colombianas S.A.S., de no haber ocurrido la situación de nulidad que se pasa a reseñar.

ANTECEDENTES

1. El señor Hoyos Martínez incoó una acción popular con el propósito de que se declare que Dulzuras Colombianas S.A.S. afectó los derechos colectivos de que tratan los literales d), g), m) y n) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.²
2. Conforme a su relato Dulzuras Colombianas S.A.S. es la propietaria de un establecimiento de comercio ubicado en la Calle 6 Sur Nro. 50 FF de Medellín, que tiene una zona de transición entre la puerta de acceso al local y el espacio público compuesta por escalones, los cuales se consideran barreras arquitectónicas de acceso que entorpecen la autonomía y segura movilidad de personas en situación de discapacidad, que deben ser corregidas.

1 Expediente digital disponible en: https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/secivmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/ExpedientesDigitales/NisimblatMurilloNattan/05001-31-03-009-2018-00203-01 carpeta 01PrimeraInstancia, archivo 17. Fallo Accion Popular.pdf.
2 Expediente digital, carpeta 01PrimeraInstancia, archivo 01.2018-0203.pdf, folio 3.

3. Dentro de la acción, se acreditó que para 2018 y 2019 existió un local que brindaba atención al público en la Calle 6 Sur Nro. 50FF – 13 de Medellín, a la cual no era posible acceder por medio de una rampa, vado o similar desde el andén, por existir 4 escalones con altura de 0,76 metros, conforme a fotos aportadas al expediente,³ e informes allegados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín.⁴

4. Sin embargo, dentro del expediente no hay material probatorio con el cual se acredite la relación de propiedad entre Dulzuras Colombianas S.A.S. y el punto comercial objeto de la acción popular.

CONSIDERACIONES

5. Según ha enseñado la Corte Suprema de Justicia, la acción popular tiene como características fundantes: *«la prevención, porque tiende a evitar un daño contingente; la suspensión, al pretender cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos, afectados o intimidados por las actuaciones de las autoridades públicas o de un particular; y la restauración, en la medida en que el propósito sea devolver las cosas a su estado anterior»*.⁵

6. Dentro de este tipo de procesos se destacan dos principios, el de la informalidad y el del impulso oficioso.⁶ Dado que el propósito de este tipo de asuntos está dado por la protección de los derechos colectivos más que por la pureza de las formas procesales, el artículo 18 literal d) de la Ley 472 de 1998 permite que se formule la demanda contra un presunto responsable, cuando esto es posible, y si este fuera conocido por el actor popular, puesto que ello *«permite al Juzgador brindar las garantías procesales necesarias a las partes para emitir un fallo en derecho»*.⁷

3 Expediente digital, carpeta 01PrimeraInstancia, archivo 01.2018-0203.pdf, folios 5, 7, 15, 27 y 31.

4 Expediente digital, carpeta 01PrimeraInstancia, archivo 01.2018-0203.pdf, folios 77 y 78 y archivo 13. InformeTecnicoAlcaldiaMedellin.pdf, folio 4.

5 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 3 de julio de 2019. Radicado 11001-02-03-000-2014-01607-00 (SC2388-2019).

6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Auto de 6 de marzo de 2020. Radicado 11001-02-03-000-2020-00205-00 (AC777-2020).

7 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 2 de abril de 2019. Radicado 66001-22-13-000-2019-00007-01 (STC4140-2019).

7. Sin embargo, el artículo 14 de la Ley 472 de 1998 impone al juez el deber de determinar claramente al responsable de la vulneración o amenaza cuando se evidencia una, y hacer su citación en forma oficiosa en la misma forma que se prescribe para la persona que fuere citada en la demanda.

8. Lo anterior, implica un deber especial de conducta para el juez popular, puesto que, una vez avizora la ocurrencia de una afectación a derechos colectivos le corresponde integrar el litisconsorcio necesario, con la efectiva citación y vinculación de quien incurre en la trasgresión, tal y como ha desarrollado la Sala de Casación Civil:

Efectivamente, ha de tenerse en cuenta que así como en las acciones de tutela es necesario notificar “a las partes o intervinientes”, tal como lo ordena el precepto 16 del Decreto 2591 de 1991, regla especialmente aplicable cuando se da inicio a su trámite y que abarca al tercero con un interés legítimo en el resultado del proceso, a quien, por consiguiente, para efectos de garantizarle su derecho de defensa, debe enterársele de la iniciación de las diligencias constitucionales. En la acción popular rige el mismo principio, pues al tenor del *in fine* artículo 18 de la Ley 472 de 1998 cuando en el curso del proceso se establezcan otros responsables de la vulneración, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los mismos términos que el demandado; de ese modo, en el *sub examine* al dejar de integrarse el litisconsorcio con el aquí accionante quien publicita a la “otra cara” y eventualmente compromete derechos colectivos, se constituyó una vía de hecho que amerita la intervención del juez de tutela.⁸

9. Esta postura fue refrendada más recientemente cuando se dijo: «*en la demanda no [es] perentorio señalar el contraventor, permitiendo que se pueda tramitar aún en el evento de que “se desconozcan los responsables” de la violación o amenaza de los referidos derechos e intereses, caso en el que se le impuso al juez la obligación de “determinarlos” (art. 14)*».⁹

10. El anterior recuento implica que en las acciones populares las partes del juicio serían la comunidad representada por quien formula el amparo colectivo, y el contraventor de los derechos comunales.

8 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 4 de abril de 2011. Radicado T-05001-22-03-000-2011-00072-01.

9 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 de diciembre de 2018. Radicado 66682-31-03-001-2016-00585-01 (AC5515-2018).

11. Este Tribunal, con fundamento en el artículo 52 de la Ley 361 de 1997 y el Decreto 1538 de 2005, hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015, Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, ha discurrido que corresponde tanto al dueño de un establecimiento de comercio abierto al público como al propietario del inmueble donde este se localice, hacer las adecuaciones pertinentes para que las personas con movilidad reducida puedan ingresar a él y circular en su interior de manera autónoma y segura.¹⁰

12. Luego, un punto trascendental que debió ser objeto de prueba dentro de la litis y no fue debidamente acreditado corresponde a la relación de propiedad entre Dulzuras Colombianas S.A.S. y el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 6 Sur Nro. 50 FF, para los años 2018 y 2019.

13. Esto, por cuanto con la demanda se anunció que la empresa reseñada era la propietaria del local reseñado, pero no se aportó ninguna prueba tendiente a demostrar ese aserto, solo se dijo que ello podía acreditarse con la base de datos conocida como Registro Único Empresarial y Social administrada por las Cámaras de Comercio y contenida en el sitio web www.rues.org.co, lo cual está amparado por el artículo 85 del CGP.

14. Tampoco, la visita realizada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín en el año 2019 dio mayores luces sobre el asunto, dado que solamente registró la existencia del desnivel a la entrada del local, pero nada dijo sobre sus ocupantes, tenedores o usuarios.¹¹

15. Asimismo, se tiene que en las fotos adosadas con la demanda el local comercial reseñado tenía la identificación «*FESTYTORTAS*»,¹² mientras que en las tomadas por el ente administrativo de control del derecho colectivo aparecía la insignia «*Cadalia*».¹³

10 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín. Sala Civil. Sentencias de 1 de junio de 2020 y 26 de enero de 2022, dictadas en los radicados 05001 31 03 005 2018 00280 01 y 05001 31 03 014 2019 00027 01 del Magistrado Ponente: Martín Agudelo Ramírez.

11 Expediente digital, carpeta 01PrimeraInstancia, archivo 01.2018-0203.pdf, folios 77 y 78.

12 Expediente digital, carpeta 01PrimeraInstancia, archivo 01.2018-0203.pdf, folios 5 y 7.

13 Expediente digital, carpeta 01PrimeraInstancia, archivo 01.2018-0203.pdf, folio 78.

16. En el plenario no hay ninguna prueba que conecte a esas marcas con la empresa Dulzuras Colombianas S.A.S.

17. Dada la especial naturaleza de este asunto, la situación reseñada no deriva en una negativa de las pretensiones por falta de legitimación en la causa de la empresa reseñada como en un pleito regular, sino en una indebida integración del contradictorio por falta de conformación de litisconsorcio necesario.

18. Puesto que, se reitera, por las especiales labores de instrucción que el legislador confirió al juez popular, a este corresponde la especial labor de individualizar al responsable de la afectación a derechos colectivos y citarlo al juicio, en tanto será esa persona quién asumirá las gestiones de suspensión y/o reparación que surjan por cuenta de la acción, según sea el caso.

19. Téngase en cuenta que aun cuando pueda haber un hecho superado, por el cierre definitivo del establecimiento abierto al público motivante del pleito, corresponde al juez popular declarar la afectación ocurrida y hacer la condena en costas por ser la solicitud de amparo la causa eficiente del cese a la transgresión de los derechos colectivos, tal y como ha reconocido este Tribunal.¹⁴

20. En este asunto, resulta actualmente imposible emitir los pronunciamientos apenas reseñados, dado que no hay prueba alguna con la cual se pueda precisar quién fue el contraventor de los intereses de la comunidad.

21. Así las cosas, corresponde aplicar la consecuencia contenida en el inciso final del artículo 134 inciso final del Código General del Proceso, y declarar la nulidad de la sentencia de instancia con el propósito de que se hagan las gestiones de individualización del propietario del local que para los años 2018 y 2019 se ubicó en la Calle 6 Sur Nro. 50 FF de Medellín, y se emita respecto de este la condena respectiva.

22. Para lo anterior, el juzgado de conocimiento deberá hacer uso de los poderes que en materia de pruebas de oficio le conceden los artículos 42 numerales 4 y 5,

¹⁴ Tribunal Superior de Medellín. Sala de Decisión Civil. Sentencia de 3 de marzo de 2021. Radicado 05001 31 03 005 2017 00536-01.

43 numeral 4, así como 169 y 170 del Código General del Proceso, solicitando, por ejemplo, informes a las Cámaras de Comercio de Medellín y Aburrá Sur, con el propósito de que referencien si en sus registros aparecía entre 2018 y 2019 un establecimiento de comercio ubicado en la Calle 6 Sur Nro. 50FF – 13 de Medellín; asimismo a la Secretaría de Hacienda de Medellín para que informe quién era el responsable del pago de los impuestos de Industria y Comercio y publicidad exterior visual del local reseñado; también a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín para que indique quién fungía como responsable de la publicidad montada en el local comercial mencionado, y a la Secretaría de Salud de Medellín, con el objeto de que informe quién era el titular del registro, permiso o notificación sanitaria en el inmueble descrito.

23. Como la nulidad afecta la sentencia, así se declarará.

En mérito de lo expuesto, **el Magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala de Decisión Civil,**

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia proferida el 20 de junio de 2023 por el Juzgado 9 Civil del Circuito de Medellín, dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO: La declaración anterior no invalida las pruebas practicadas respecto de quienes tuvieron la oportunidad de controvertirlas (art. 138 inc. 2 del Código General del Proceso).

TERCERO: Para rehacer la actuación anulada, se ordena al juzgado de conocimiento que ejecute las labores de instrucción correspondientes para determinar quién era el propietario del edificio abierto al público localizado en la Calle 6 Sur Nro. 50FF – 13 de Medellín durante los años 2018 y 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

(Firmado electrónicamente)
NATTAN NISIMBLAT MURILLO
Magistrado

DAPM

Firmado Por:
Nattan Nisimblat Murillo
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **631f77c4bda1ee53ca1fa5aae3f27cbddda38111c4bdf1483ed8714099647645**

Documento generado en 24/08/2023 10:05:05 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>